

Coyhaique, dos de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y OÍDOS:

En estos antecedentes, Rol Corte N° 386-2024, comparece el abogado don Lorenzo Avilés Rubilar, en representación del sentenciado CRISTHIÁN ANDRÉS SANDOVAL VIDAL, quien interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, de fecha 23 de septiembre de 2024, mediante la cual se condenó a su representado, como autor de un delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en el artículo 3 en relación al artículo 1, ambos de la ley N° 20.000, en grado consumado, a la pena – efectiva – de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales vigentes a la fecha de su pago. El recurrente invoca como causal de su recurso, la establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 11 en sus numerales 6 y 9 del Código Penal, pidiendo en su mérito que se invalide sólo la sentencia recurrida, conforme lo dispone el artículo 385 del Código Procesal Penal, y se dicte sin nueva audiencia – pero separadamente – una de reemplazo, que en definitiva imponga la pena de tres años y día de presidio menor en su grado máximo, o la que esta Corte determine dentro del tramo señalado, más las accesorias legales, y se conceda a su defendido la pena sustitutiva, ya del artículo 15 o 34 de la ley N° 18.216, en su actual redacción.

Con fecha 12 de noviembre del presente, se procedió a la vista del recurso, compareciendo, el Defensor Penal Privado, don Lorenzo Avilés Rubilar, por el recurso, y en representación del Ministerio Público, el abogado don Matías Oviedo Sandoval, quien instó por el rechazo de aquél y la confirmación de la sentencia recurrida.

CONSIDERANDO:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PEMXXRJXNDL

PRIMERO: Que el Defensor, en representación del sentenciado CRISTHIÁN ANDRÉS SANDOVAL VIDAL, deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, con fecha 23 de septiembre del presente año, invocando como única causal, la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho, que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Que al fundamentar el recurso, el letrado radica la controversia en la circunstancia que los sentenciadores, no hicieron aplicación en beneficio de su defendido, de las circunstancias atenuantes de responsabilidad, contenidas en el Código Penal, en su artículo 11 N° 6 - irreprochable conducta anterior - y N° 9 - colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos -, respectivamente.

Luego, reproduce parcialmente el Considerando Décimo Cuarto de la sentencia impugnada, que contiene las menciones que motivan el rechazo de ambas atenuantes pretendidas por el recurrente, específicamente en sus párrafos 3° a 5°, los que señalan a la letra: *“Se rechaza la concurrencia de la atenuante del artículo 11° 6 del Código Penal, pues de las propias alegaciones efectuadas por la defensa y mérito del Extracto de Filiación y Antecedentes, consta que el sentenciado registra condenas por delitos faltas, esto es, ha sido sujeto de reproche por ilícitos penales, lo que lleva a descartar su irreprochable conducta anterior.*

En cuanto a la atenuante del artículo 11 N° 9 del CP, el tribunal la desestima, pues pese a que el acusado al declarar en juicio reconoció que coordinó el envío de la encomienda con droga y que fue detenido luego de retirarla, dicha colaboración no resulta sustancial, pues la sustancia psicotrópica ya había sido detectada y el retiro por el acusado constó de las declaraciones de los funcionarios policiales que participaban en la vigilancia de la encomienda respecto de la cual se



efectúa a su entrega controlada, con la cual el acusado salió a la vía pública, momento en que es controlado y detenido.

Tampoco es suficiente para establecer la atenuante, el hecho que el acusado indique que entregó su celular, pues los testigos indicaron que fue incautado en el momento de su detención, señalando el señor Flores que Sandoval Vidal no autorizó la revisión del celular, y que sólo con autorización judicial se procedió a ello, desprendiéndose de los hallazgos realizados que el acusado se dedicaba directamente al tráfico de drogas, y gestionaba directamente a través de su teléfono el envío de drogas para tales efectos, y no sólo que las encargaba para un tercero de nombre Nicolás como dijo en juicio.”

Transcrito lo anterior, el recurrente, sostiene que el tribunal ha errado en su fundamentación, para no conceder la atenuante del numeral 6 del artículo 11 del código punitivo, citando al efecto doctrina y jurisprudencia y, a continuación refiere que esta minorante de responsabilidad lo que persigue es deprimir la intensidad o nivel en la corrección y resocialización del sujeto, bajo el entendido que previamente su conducta se ha adecuado al ordenamiento, y por ende se debe comprender el delito como una situación excepcional en el marco de su habitual comportamiento.

En lo que dice relación con la segunda atenuante pretendida, esto es, la de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, del artículo 11 N° 9 del Código Penal, reprocha las argumentaciones y razonamientos expresados por los sentenciadores, en atención a la actual redacción de la norma en cuestión, que se vio modificada por ley N° 21.694, la que establece 3 requisitos: i) que exista colaboración en el esclarecimiento de los hechos; ii) que dicha colaboración sea sustancial y; iii) que sea de menor entidad que la exigida para una cooperación eficaz.

A este respecto, y de acuerdo al criterio del defensor, el sentenciado cumplió con los 3 requisitos, por cuanto prestó



declaración, no sólo en el juicio, sino también durante la investigación; adicionalmente sostiene que dicha declaración fue del todo trascendente para el esclarecimiento de los hechos materia del caso, permitiendo a modo ejemplar que el juicio propiamente tal durara menos de 2 horas, constituyendo una verdadera confesión; y respecto al tercer elemento, agrega que si bien el Ministerio Público no reconoció en favor de su representado, la cooperación establecida en el artículo 22 de la Ley N° 20.000, de todos modos sí le permitió al persecutor fiscal seguir una línea investigativa enfocada en otros ilícitos. Todo esto le permite afirmar que la colaboración de su mandante, tuvo una menor entidad que aquella exigida para la cooperación eficaz.

Por lo expresado, el pretensor de nulidad sostiene que los yerros acusados y cometidos por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, en lo que dice relación con la interpretación de las disposiciones de los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, causando un grave perjuicio a su representado, al verse enfrentado a una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo más multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales y accesorias, no obstante que, habiéndose acreditado que el sentenciado no tenía anteriormente condenas por crimen o simple delito, y que objetivamente colaboró en los términos exigidos en la ley, necesariamente debieron configurarse en su favor las circunstancias atenuantes alegadas, y así las cosas, al existir dos que lo favorecen y ninguna agravante que lo perjudique, era posible rebajar la pena en a lo menos un grado, quedando en definitiva en presidio menor en su grado máximo, pudiendo acceder igualmente a la concesión de una pena sustitutiva, específicamente la establecida en el artículo 15 o la del artículo 34 de la Ley N° 18.216.

Finalmente, y por lo argumentos expuestos, pide que esta Corte declare la nulidad de la sentencia, dictando una de reemplazo, que acoja las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 11 N° 6 y 9



del Código Penal en favor del condenado, y en ese mérito, se rebaje la pena a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, o la que este tribunal determine dentro de dicho tramo, más las accesorias legales, y se conceda para su cumplimiento, la pena sustitutiva contenida en el artículo 15 de la ley N° 18.216, o la del artículo 34 del mismo cuerpo normativo.

SEGUNDO: Que durante la vista del recurso, el defensor privado, don Lorenzo Avilés Rubilar, reitera los argumentos contenidos en su presentación escrita, discrepando con los sentenciadores, quienes no acogieron su solicitud de conceder en favor de su representado, las atenuantes ya mencionadas precedentemente, conforme los razonamientos que plasman en el Considerando Décimo Cuarto de la sentencia.

Así, y en cuanto a la primera circunstancia pretendida - artículo 11 N° 6 del Código Penal -, el Tribunal Oral en lo Penal, la desecha en atención a que el sentenciado en su historial previo acusa dos anotaciones por faltas penales, lo que impediría la concesión de la minorante. Al respecto reitera la cita doctrinaria, del Profesor Enrique Cury, contenida en su recurso, quien es del parecer que los tribunales no deberían considerar en el análisis para la concurrencia o no de esta circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, aquellas máculas referidas a faltas penales, delitos culposos u otros, que revistan una entidad menor.

Que, en lo que respecta a la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, señala que el argumento para desechar su concurrencia fue bastante sencillo, al expresar los sentenciadores que aquí no se daban los elementos desde su perspectiva para que haya una colaboración que sea sustancial al esclarecimiento de los hechos, ya que si bien declaró, ésta no se constituye en sustancial, por haber estado probados los hechos antes de ella. En este punto hace presente el apoderado del sentenciado, que con fecha 04 de septiembre de 2024, entró en vigencia la ley N° 21.694, la que



objetiviza esta atenuante, por cuanto antes se componía de dos requisitos, esto es, colaboración y sustancialidad, en cambio, a partir de esta ley, se incorpora un tercer requisito - que la colaboración sea de menor entidad que la que se exige para configurar una cooperación eficaz - el cual aporta un elemento más objetivo para determinar si la atenuante pretendida, concurre o no. A continuación, da cuenta de las actuaciones en las cuales participó su representado, tanto en fase investigativa, como en el propio juicio oral.

Ya en la parte final de su alegato, reitera que los sentenciadores, han incurrido en una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en los dos aspectos que ha mencionado, al no considerar la concurrencia de las atenuantes pretendidas, ya que de haberse concedido, el sentenciado dispondría de la posibilidad de rebaja en al menos un grado de la pena asignada al delito, y en ese tramo - presidio menor en su grado máximo - además con la posibilidad real de discutir para efectos de cumplimiento, la concesión de una pena sustitutiva.

Por lo anterior solicita que se acoja el presente recurso, se anule la sentencia, dictando una de reemplazo que dé por concurrentes las atenuantes de irreprochable conducta anterior, como así también de colaboración sustancial, y en su mérito, se rebaje la pena a un presidio menor en su grado máximo en el rango que esta Corte estime ajustado a derecho, más las accesorias legales, y además se le otorgue la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, contemplada en el artículo 15 de la ley N° 18.216, toda vez que de acuerdo a informe leído en la audiencia respectiva, se da cuenta de los factores que favorecen a su representado, y permiten presumir que un tratamiento en libertad lo disuadirá de cometer nuevos delitos.

En su réplica, reitera que con la modificación de septiembre de 2024, se modificaron los requisitos del artículo 11 N° 9 del Código Penal, intentando objetivizar la atenuante en cuestión. Respecto a la irreprochable conducta anterior, refuerza la posición del profesor Cury,



en cuanto a que no deben ser considerados los hechos punibles de poca importancia, para efectos de no concederla.

TERCERO: Que a su turno, el representante del Ministerio Público, don Matías Oviedo Sandoval, solicitó se confirme la sentencia recurrida, por considerar que ella se encuentra correctamente fundada y ajustada a derecho.

En cuanto a la colaboración sustancial reclamada por la defensa del sentenciado, sostiene el representante del persecutor fiscal, que conforme al Considerando Décimo Cuarto, queda reflejado que por ejemplo el reconocimiento del sentenciado en cuanto a la propiedad de la droga, no aporta absolutamente nada, ya que previamente se conocía su identidad, el contenido de la encomienda, etc. Igualmente el tribunal se hace cargo del punto referido al teléfono celular del acusado, y que a diferencia de lo sostenido por su contraparte, si bien efectivamente lo entregó, no autorizó la revisión del equipo, por lo que se tuvo que requerir autorización judicial para llevar a cabo la diligencia. Así, queda claro que el condenado con su intento de colaboración, nada nuevo aportó para el esclarecimiento de los hechos sometidos al conocimiento del tribunal. Para reafirmar su postulado, cita diversos fallos tanto de Cortes de Apelaciones como así también de la Corte Suprema.

En cuanto a la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, la discusión ha sido zanjada por la jurisprudencia, y en lo concreto, el sentenciado a la época de los hechos registraba dos condenas por faltas penales, y al constar en su extracto de filiación, no puede considerarse que exista a su favor dicha circunstancia.

Por lo alegado, culmina solicitando el rechazo del recurso intentado, al no existir errónea aplicación del derecho de parte del tribunal de juicio oral en lo penal.

En su réplica, reitera lo ya ventilado en su primera alocución, y respecto de la colaboración sustancial, cuya concurrencia pide el defensor que se declare, indica que la modificación legal introducida a



la norma del artículo 11 N° 9 del Código Penal, no importa un cambio al espíritu de la disposición, y por lo tanto mantiene los mismos requisitos para su configuración.

CUARTO: Que fundándose el presente recurso de nulidad en una causal única, cual es la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, el defensor recurrente, no ha cuestionado ni la calificación jurídica hecha por los sentenciadores de la instancia, ni tampoco la participación que le ha cabido a su representado, radicando por tanto su pretensión recursiva, en el no reconocimiento de dos circunstancias atenuantes de responsabilidad, a saber, la de irreprochable conducta anterior, contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal y, la de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, conforme al artículo 11 N° 9 del mismo código.

Que, a través de la causal de nulidad que se examina, únicamente pueden denunciarse errores “in iudicando”, es decir, vicios cometidos en el juicio jurídico del juzgador en la sentencia, sea en la interpretación de la ley, en la subsunción jurídica o en la determinación del hecho (Gonzalo Cortés, El Recurso de Nulidad, Doctrina y Jurisprudencia, Legal Publishing). Las modalidades de la infracción pueden ser respecto de la aplicación de la ley a una situación en la que no correspondía aplicarla, en la falta de aplicación de la ley a una situación en que debía ser aplicada y, la errónea aplicación o interpretación de la ley.

QUINTO: De esta manera, y sin haberse cuestionado los hechos que se tuvieron por acreditados, pero siendo a criterio de esta Corte necesarios para una mejor comprensión, se debe apuntar que ellos están establecidos en el Considerando Décimo de la sentencia que motiva el presente recurso, y que señala: “Hechos acreditados. Con el



análisis de la prueba que precede, han resultado suficientemente probados los siguientes hechos:

Que el acusado Cristhián Sandoval Vidal coordinó con una tercera persona el traslado de droga del tipo cannabis hasta la región de Aysén, con destino final Puerto Aysén, por medio de la encomienda con orden de flete 992.947.831 de la empresa Starken, y el día 11 de diciembre de 2023, personal de la PDI junto a un ejemplar canino, concurrieron hasta la bodega de dicha empresa, ubicada en calle Ogana 1599 de Coyhaique, e identificaron la citada encomienda, la que fue abierta con la autorización respectiva, constatando que en su interior habían tres bolsas de nylon transparente que contenían marihuana o cannabis, con un peso de 397,94 gramos, 508,73 gramos y 53,27 gramos, netos, respectivamente. La droga fue sustituida conforme a las autorizaciones respectivas para su entrega vigilada.

Posteriormente, el día 14 de diciembre de 2023, don Cristhián Sandoval Vidal concurrió hasta la oficina de la empresa Starken de Puerto Aysén, ubicada en calle Michimalonco N°502, procedió a retirar la encomienda sujeta a entrega controlada, saliendo a la vía pública, lugar donde fue detenido.”.

SEXTO: Que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, previamente, se hacen cargo del análisis de la prueba producida en el juicio – en el Considerando Noveno de la sentencia – haciendo mención a las diferentes pruebas producidas durante el juicio, y que en su conjunto le permitieron dar por acreditados los hechos contenidos en el ya transcrito Considerando Décimo del fallo cuestionado.

SÉPTIMO: Que así entonces, y tal como lo han referido los letrados durante sus alegatos, en el Considerando Décimo Cuarto, los sentenciadores se hacen cargo de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, señalando al efecto: “**14.- Modificatorias de responsabilidad penal.** Conforme al acusador no concurren modificatorias de responsabilidad penal; que existiría un germen de



colaboración por la declaración del acusado, sin embargo estima que no es completa, pues dice que sería un tercero quien le pide encargar la droga.

La defensa, por su parte, sostuvo que concurre la atenuante de irreprochable conducta anterior ya que su representado sólo tiene condenas por faltas, esto es, no por crimen ni simple delito; y además la atenuante del artículo 11 N°9 del CP, considerando el tenor del veredicto, porque declaró y además entregó su teléfono celular. En caso de rechazarse la primera atenuante alegada, pide que se tenga como muy calificada la atenuante de colaboración.

Se rechaza la concurrencia de la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, pues de las propias alegaciones efectuadas por la defensa y el mérito del Extracto de Filiación y Antecedentes, consta que el sentenciado registra condenas por faltas, esto es, ha sido sujeto de reproche por ilícitos penales, lo que lleva a descartar su irreprochable conducta anterior.

En cuanto a la atenuante del artículo 11 N°9 del CP, el tribunal la desestima, pues pese a que el acusado al declarar en juicio reconoció que coordinó el envío de la encomienda con droga y que fue detenido luego de retirarla, dicha colaboración no resulta sustancial, pues la sustancia psicotrópica ya había sido detectada y el retiro por el acusado constó de las declaraciones de los funcionarios policiales que participaban en la vigilancia de la encomienda respecto de la cual se efectúa a su entrega controlada, con la cual el acusado salió a la vía pública, momento en que es controlado y detenido.

Tampoco es suficiente para establecer la atenuante, el hecho que el acusado indique que entregó su celular, pues los testigos indicaron que fue incautado en el momento de su detención, señalando el señor Flores que Sandoval Vidal no autorizó la revisión de su celular, y que sólo con autorización judicial se procedió a ello, desprendiéndose de los hallazgos realizados que el acusado se dedicaba directamente al tráfico de drogas, y gestionaba directamente



a través de su teléfono el envío de drogas para tales efectos, y no sólo que las encargaba para un tercero de nombre Nicolás como dijo en juicio.

En la especie, no se alegó agravante alguna.”.

OCTAVO: Que, conforme al mérito del considerando precedentemente transcrito, se desprende que los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, se hicieron cargo de cada una de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal alegadas por la defensa del encartado.

Que en consecuencia, la causal propuesta por el defensor recurrente, que es estricta y mira a la correcta o incorrecta aplicación del derecho, deberá ser rechazada por cuanto no se observa en la sentencia impugnada, que se hubiere incurrido en un vicio de esta naturaleza, esto es, en una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al negar la concurrencia de las atenuantes pretendidas y que constituye el sustrato del recurso presentado, dado que el tribunal fundamentó su decisión, en cuanto resuelve negar la concurrencia de la circunstancia de irreprochable conducta anterior, por constar en el extracto de filiación del acusado, la existencia de dos castigos penales, y en cuanto a la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, no la otorga, según se concluyó, por considerar que, sin perjuicio de la declaración prestada por el acusado, los hechos y su participación se encontraban ya establecidos, a través de otros medios probatorios, e incluso hacen referencia a que si bien pudo haber entregado voluntariamente su teléfono celular, los agentes policiales tuvieron que - a través de fiscalía - obtener una autorización judicial para proceder a revisarlo.

Que, a la luz de lo expuesto, y existiendo un razonamiento de los sentenciadores, por ese sólo hecho debe rechazarse el recurso interpuesto, en el entendido que la competencia otorgada a esta Corte, conforme a la causal invocada, no permite otro tipo de análisis, como



lo desliza el recurrente, ya que ello obligaría a un segundo examen de la prueba rendida, lo que, por respeto al principio de inmediación, a este tribunal le está vedado realizar.

NOVENO: Que, de otra parte, tampoco se puede obviar el hecho que, el reconocimiento o denegación, de cualquier circunstancia modificatoria de responsabilidad en beneficio o perjuicio del acusado, constituye una actividad propia y exclusiva de ponderación de los jueces - en este caso del tribunal oral en lo penal - que conocieron y analizaron las pruebas que se rindieron por el ministerio público.

A su turno, y siguiendo con la lógica de la pretensión del recurrente, se debe igualmente advertir que, tratándose la causal invocada de un error de derecho, cuya influencia sustancial habría impactado, conforme a lo establecido en el artículo 68 del código punitivo, nos coloca en la problemática de que, esta última disposición, establece una facultad al sentenciador, lo que se desprende de la expresión “podrá”, y en consecuencia, aún cuando se compartiera el criterio del recurrente, en el sentido de dar por configuradas las minorantes pedidas, ello tampoco traería como consecuencia obligatoria, la rebaja a que se alude, para quedar en definitiva en el tramo de presidio menor en su grado máximo.

Finalmente, y en cuanto a la pretensión de concesión de una pena sustitutiva, para que, en concreto, el sentenciado acceda a una libertad vigilada intensiva, conforme a los artículos 15 y siguientes de la ley N° 18.216, cabe hacer presente su impertinencia en esta sede, al no contar con los insumos necesarios para su debido análisis, ni tampoco haber sido precedida del correspondiente debate por los intervinientes, afectando en consecuencia el principio de bilateralidad de la audiencia, que implica que todas las partes tengan la posibilidad de ser escuchadas acerca de la controversia que se somete a decisión.

De este modo entonces, si bien es válido que el recurrente disienta de la decisión adoptada a este respecto, ello no habilita, ni



menos califica para tener dicha disconformidad, como suficiente para tener por acreditada una infracción legal que amerite la anulación de una sentencia, como se pretende en estos autos.

DÉCIMO: Que conforme a todo lo manifestado, estima esta Corte que no concurren los elementos necesarios para hacer lugar a la pretensión de la defensa del condenado, ya que si bien, existe un reproche en relación con los criterios expresados en el fallo, en lo tocante a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, contempladas en el artículo 11 numerales 6 y 9 del Código Penal, y aún más, consintiendo estos sentenciadores, en que ambas disposiciones legales, no constituyen al día de hoy instituciones pacíficas en sede judicial, existiendo posiciones encontradas, dependiendo del tribunal de donde emane la decisión; ello per se, no habilita a alzarse con un recurso de nulidad ya que, no existiendo una posición unívoca respecto de las circunstancias modificatorias de responsabilidad antes dichas, no puede entonces atacarse a aquellas que no satisfacen a la parte, por el simple hecho de no compartir la tesis en cuestión, mediante un recurso de esta naturaleza.

Por estas consideraciones, y teniendo presente las disposiciones legales citadas y lo previsto en los artículos 352, 358, 372, 373 letra b), 376, 377, 378, 384 y 385 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el Defensor Privado, don Lorenzo Avilés Rubilar, en contra de la sentencia dictada con fecha 23 de septiembre de 2024, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, en cuanto por ella se condenó al acusado CRISTHIÁN ANDRÉS SANDOVAL VIDAL, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales, en su calidad de autor de un delito de Tráfico ilícito de drogas, previsto en el artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley



20.000, cometido el día 14 de diciembre de 2023, en la comuna de Aysén; y en consecuencia, dicha sentencia no es nula.

Regístrese, notifíquese y dése a conocer a los intervinientes en el día y hora fijados oportunamente.

Redacción del Abogado Integrante, don Enrique Antonio Velásquez Trujillo.

No firma el Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol N° 386-2024 (Penal)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PEMXXRJXNDL

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E. y Abogado Integrante Enrique Antonio Velasquez T. Coyhaique, dos de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Coyhaique, a dos de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PEMXXRJXNDL